

# DE LA PROVINCIA DE ORENSE

**Precios de suscripcion.** { En Orense, trimestre adelantado, 5 pesetas.  
Fuera, id. id. id. .... 6 " "  
Números sueltos..... 0'25

Se suscribe en esta capital, en la **Imprenta de A. Otero, San Miguel, 15.**

*Los originales comprendidos en la condición 23 de la contrata, no se publicarán sin previo pago, entendiéndose para esto con el contratista.*

Que el Gobernador de Málaga, á instancia del Delegado de Hacienda y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado para que dejase de enten-



der en las diligencias entabladas por daños causados en los montes públicos de Benalauria, alegando: que según la legislación penal de Montes, reformada por el Real decreto de 5 de Mayo de 1884 en su art. 40, se preceptúa que son Autoridades competentes para entender de las denuncias, imposición y exacción de las multas y demás responsabilidades prescritas en el referido Real decreto los Gobernadores civiles de las provincias y los Alcaldes, con sujeción á las reglas que el mismo artículo establece; que por el artículo 12 del Real decreto de 20 de Septiembre de 1896 se dispone que la custodia de los montes que pasan á cargo del Ministerio de Hacienda continuará encomendada á la Guardia civil, que, en cuanto afecte á este servicio de guardería forestal, dependerá del expresado Ministerio; que en todo lo relativo á los abusos, daños é infracciones que se cometan en aquellos montes, como todas las incidencias de sus servicios, sustituirán á los Gobernadores civiles los Delegados de Hacienda dentro de las facultades y atribuciones propias de esta Autoridad, y al Ingeniero Jefe del Distrito forestal, el funcionario de esta clase afecto á la Inspección facultativa de Montes que se halla al frente del servicio propio de éste en la región correspondiente; que el art. 33 del reglamento de 14 de Agosto de 1900 preceptúa que para la instrucción de esos expedientes de denuncia por abusos en los montes á cargo de la Hacienda y consiguiente castigo de los infractores, regirá la reforma de esta legislación penal de 8 de Mayo de 1884, con las sustituciones expresadas en el art. 12 del Real decreto de 20 de Septiembre de 1896; que el art. 34 del mencionado reglamento dispone que toda denuncia deberá ser presentada ante el Alcalde del pueblo en cuya jurisdicción radique el predio, lugar del hecho motivo de aquella, y será puesto inmediatamente por dicha Autoridad en conocimiento del Delegado de Hacienda y del funcionario encargado del servicio forestal; y que siendo la cuestión de que se trata puramente administrativa y regulada por leyes especiales de igual carácter, el Juzgado municipal de Benalauria no había podido admitir la demanda, ni menos tramitar las diligencias sumariales por daños causados en los montes públicos de aquel término.

Que después de llegar el oficio de requerimiento al Juzgado, se recibieron éste varios antecedentes, reclamados con anterioridad á la fecha en que aquél oficio aparece recibido, siendo uno de dichos antecedentes certificación de las actas del señalamiento de las leñas en los montes Baldíos, Candias, Rosal y Opallar Alto, de las que parece que en el primero de éstos se señalaron 50 árboles, en el segundo 150, en el tercero 100 y en el cuarto 400.

Que sustanciado el incidente de competencia, el Juez dictó auto, en que sostuvo su jurisdicción, aduciendo en apoyo de la misma: que estando justificado debidamente en el sumario que los daños causados en los montes Opallar Alto, Can-

días, Rosal, Baldíos y Dehesa exceden con mucho de la suma de 2 500 pesetas, es evidente la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer del delito que el citado hecho constituye, y castigar en su día á los culpables, en armonía con lo dispuesto en la regla 3.ª del art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884; que conforme al apartado 2.º del art. 4.º del citado Real decreto, los Tribunales ordinarios son los únicos competentes para conocer del delito de sustracción de productos forestales; y se corrobora además tal competencia por la regla 4.ª del art. 40 de dicho Real decreto, la cual reserva á aquéllos el castigo de la infracción de un precepto contenido en las leyes y disposiciones vigentes en materia de montes públicos que tenga señalada una penalidad cuando haya sido el modelo de perpetrar un delito definido en el Código penal; y como en el caso de autos la infracción cometida al causar el daño ha sido el medio de perpetrar el delito de hurto, puesto que el culpable cortó maderas, que convirtió en traviesas, y, juntamente con otros productos, los extrajo de los montes con el evidente propósito de hacerlas suyas y lucrarse con las mismas, que son los elementos que integran el referido delito, es indudable que su castigo compete á la jurisdicción ordinaria (Reales decretos de 8 de Enero y 22 de Mayo de 1892, 29 de Mayo de 1894, 13 de Febrero de 1895 y otros, y sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 1886 y 3 de Diciembre de 1892).

Que habiéndose acreditado en las actas suscritas por el Ayudante de la Sección facultativa de Montes y demás funcionarios y testigos que intervinieron en ellas, haberse hecho en los mismos el señalamiento de los árboles que debían ser cortados y aprovechados, y apareciendo de la causa, por diligencias y declaraciones de testigos, que no existió semejante señalamiento, es indudable que tal hecho constituye el delito de falsedad en documento público, cuyo castigo corresponde exclusivamente á los Tribunales ordinarios, sin que puedan servir de materia para competencia jurisdiccional entre éstos y la Administración los hechos que desde luego por su naturaleza, y sin necesidad de previa resolución, ofrecen, como el presente, los caracteres del referido delito, doctrina, según el Juzgado, sustentada en los Reales decretos de 14 de Abril de 1893, 10 de Septiembre de 1890, y otros que cita; y que por los fundamentos expuestos, era indiscutible que no estando reservado por la ley á los funcionarios de Administración el castigo de ninguno de los tres hechos que se investigan en la causa, ni habiendo cuestión alguna previa que en virtud de aquella deba deducirse por la Autoridad administrativa, y de la cual dependa el fallo que los Tribunales hayan de pronunciar en su día en este proceso, es evidente que no se está en ninguno de los dos casos en que, por excepción, pudo el Gobernador requerir de inhibición, como lo ha hecho.

Que dictado y hecho el auto ante-

rior, se recibió en el Juzgado una comunicación del Ingeniero de Montes de la región 12, expresando: que del reconocimiento practicado por él en cumplimiento de orden de la Dirección general de Propiedades, resultaban extralimitaciones diversas con motivo de la corta que en los montes Candias, Dehes, Opallar, Rosal y Baldíos, se autorizó al rematante D. Andrés Bolaino, y que, sin perjuicio de lo que resultase del expediente administrativo que se instruya acerca de la importancia y responsabilidades que procede exigir por los abusos que se relacionan con la corta de árboles, cuyos tocones actualmente aparecían señalados y marcados en su corte transversal con el marco oficial núm. 22, ponía en conocimiento del Juzgado aquéllos, que desde luego eran de la competencia de la jurisdicción ordinaria, haciendo presente el hecho de haber encontrado 781 tocones distribuidos y clasificados según al margen se expresaba, y en los que, por carecer de toda señal ó marca, no había podido ser autorizada la corta de los árboles que á los mismos correspondía, así como la poda más ó menos completa de 148 pies.

Que de una certificación expedida por el mismo Ingeniero, y que acompañó á la comunicación que dirigió al Juzgado, aparece que dicho funcionario estimó que en el monte Dehesa se habían cortado abusivamente 161 árboles, siendo el producto de esta corta, más el de los procedentes de las podas, 526 pesetas, y la cuantía de los daños y perjuicios, 322; que en el monte Baldíos se había reducido la extralimitación á la corta de un árbol, importando los productos 10 pesetas 12 céntimos, y los daños y perjuicios 7 pesetas; que en el Monte Rosal la extralimitación era de cuatro árboles, el valor de los productos 12 pesetas 36 céntimos, y los daños y perjuicios 8 pesetas 20 céntimos; que en las Candias, los árboles cortados abusivamente eran 22, el valor de los productos, con inclusión de las ramas que sin autorización alguna habían sido aprovechadas, eran 47 pesetas 40 céntimos, y el de los daños y perjuicios 61 pesetas 60 céntimos; y que en el Opallar Alto, los árboles cortados en cuyo tocón no aparecía señal ni marco alguno, ascendían á 593 pesetas, el valor de los productos 799 pesetas con 92 céntimos, y los daños y perjuicios 871 pesetas 50 céntimos; se hacía mención también en la certificación expresada, de 342 traviesas extraídas del monte Opallar, y que se tasaban en 1.710 pesetas; y como resumen general, se fijaba el valor total de los productos cortados en 3.185 pesetas 80 céntimos, y la tasación de daños y perjuicios en 1.270 pesetas 30 céntimos.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en el requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 33 del reglamento de 14 de Agosto de 1900, sobre régimen de los montes á cargo del Ministerio de Hacienda, que dice: «Para la instrucción de los expedientes de denuncia por abusos en los montes á cargo de la Hacienda, y el consiguiente castigo de los infractores,

regirá la reforma de la legislación penal de 8 de Mayo de 1884, con las sustituciones expresadas en el artículo 12 del Real decreto de 20 de Septiembre de 1896, excepto en lo que se oponga á las disposiciones contenidas en este reglamento».

Visto el art. 4.º del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, según el cual: «El que cortare ó arrancare árboles, leñas gruesas ó ramajes, cepas ó tocones, será castigado con una multa igual al valor de los productos, decomisándose éstos. Además indemnizará los daños y perjuicios. Si los productos hubieran sido extraídos del monte con ánimo de lucrarse, entenderán los Tribunales ordinarios con arreglo al Código penal».

Vista la regla 3.ª del mismo artículo 40 del referido Real decreto, que dice: «De los daños causados en los montes públicos cuyo importe exceda de 2 500 pesetas, conocerán los Tribunales de justicia, con arreglo á las prescripciones del Código penal».

Vista la regla 4.ª del mismo artículo, según la cual: «Cuando la infracción de un precepto de las leyes y disposiciones vigentes que tengan penalidad, señalada haya sido el medio de perpetrar un delito definido en el Código penal, se reservará su castigo á los Tribunales».

Visto el núm. 4.º del art. 314 del Código penal, según el que: «Incurrir en la responsabilidad que señala dicho artículo el funcionario público que, abusando de su oficio, cometiera falsedad faltando á la verdad en la narración de los hechos».

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores de provincia promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando, en virtud de la misma ley, deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar.

Considerando:

- 1.º Que la presente cuestión de competencia se ha suscitado con ocasión de la causa seguida en el Juzgado de Instrucción de Gaudín por abusos cometidos en los montes que se hallan á cargo del Ministerio de Hacienda;
- 2.º Que por la cuantía de los daños causados, por el hecho de haber habido extracción de productos forestales y por el propósito de indebidamente lucro que revela el conjunto de los hechos que del sumario aparecen, corresponde entender en la averiguación y castigo de los abusos cometidos en los montes de que se trata á los Tribunales de justicia, cuya competencia para conocer de ellos se corrobora aún por el íntimo enlace de dichos abusos con el delito ó delitos de falsedad que pueden haberse cometido si en las actas de señalamiento de las leñas se faltó á la verdad al consignar que se marcaron los árboles que habían de ser cortados; y
- 3.º Que no existiendo cuestiones previas administrativas respecto de los delitos de falsedad, ni tampoco en el presente caso respecto de los abusos cometidos en los montes por el especial carácter que los mismos han revestido, no se está en el presente conflicto en ninguno de los dos casos en que, por excepción, pueden los Gobernadores promover contiendas de jurisdicción en los juicios criminales.

Conformán tome con la consulta por el Consejo de Estado en pleno.

Vengo en decidir que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil novecientos tres.—Alfonso.—El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silveira.



## AYUNTAMIENTO DE CEA

RELACIÓN nominal rectificada de los propietarios de fincas que han de ser expropiadas en todo ó en parte en el citado Ayuntamiento para las obras del trozo primero de la carretera de tercer orden de Cea á Bustelo de Abajo.

(Conclusión.—Véase el número anterior.)

Número de orden	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PROPIETARIOS	Vecindad de los propietarios	Clase de las fincas	Situación de la finca	Nombres de los colonos ó arrendatarios	Vecindad de los colonos ó arrendatario
247	Facundo Rodríguez Manso	Cobas	Monte	As Contañas	El mismo	
248	Ramón Conde García	Bustelo	Id.	Id.	Id.	
249	Agustín Freigedo Alvarez	Cobas	Id.	Id.	Id.	
250	Antonio Rey Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
251	Santiago Vázquez González	Id.	Id.	Id.	Id.	
252	Manuel Rodríguez Rodríguez	Id.	Labradío	Id.	Id.	
253	Manuel Adá Rodríguez	Id.	Id.	Chouso	Id.	
254	Facundo Rodríguez Manso	Id.	Prado	Id.	Id.	
255	Manuel Adá Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
256	Manuel Rodríguez González	Id.	Labradío	Chouso	Id.	
257	Domingo Fernández González	Bustelo	Id.	Id.	Id.	
258	José Manuel González	Cobas	Id.	Id.	Id.	
259	Andrés González Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
260	Antonio Rodríguez Iglesias	Id.	Prado y tojal	Id.	Id.	
261	Domingo Fernández González	Id.	Tojal	Id.	Id.	
262	Francisco Docampo Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
263	Andrea Vázquez Rodríguez	Cea	Id.	Id.	Id.	
264	Monte comunal	Cobas	Monte	Id.	Id.	
265	Santiago Vázquez González	Id.	Monte comunal	Trasido Chouso	Id.	
266	El mismo Santiago Vázquez	Id.	Tojal	Sidura	Id.	
267	Agustín Vázquez Rodríguez	Id.	Monta	Rebordelongo	Id.	
268	Luisa Vázquez Alvarez	Id.	Id. y labradío	Id.	Id.	
269	Angel Rodríguez de Cabo	Id.	Id.	Id.	Id.	
270	Francisco Conde Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
271	Bartolomé Garriga Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
272	Luis Garriga Rodríguez	Anllo	Id.	Id.	Id.	
273	Hermenegildo Rodríguez Gómez	Cobas	Id.	Id.	Id.	
274	Enrique Alvarez Sanmamed	Id.	Id.	Id.	Id.	
275	Fructuoso Crespo Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
276	Benito Fernández Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
277	Manuel Rodríguez Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
278	Eladio Crespo Testa	Id.	Id.	Id.	Id.	
279	Francisco Fernández González	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
280	Antonio Rey Rodríguez	Cobas	Id.	Id.	Id.	
281	Luis Garriga Rodríguez	Anllo	Labradío	Lamiñas	Id.	
282	Claudino Garriga Rodríguez	Cobas	Id.	Id.	Id.	
283	Francisco Fernández González	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
284	Domingo Fernández González	Cobas	Id.	Id.	Id.	
285	Manuel Adá Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
286	Gerónimo Rodríguez Bravo	Id.	Tojal	Id.	Id.	
287	José Fernández Fernández	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
288	Gerónimo Rodríguez Bravo	Cobas	Id.	Id.	Id.	
289	Francisco Fernández González	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
290	Angel García Fernández	Cobas	Id.	Id.	Id.	
291	Dominga Rodríguez Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
292	Manuel Rodríguez Sagrade	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
293	Dominga Rodríguez Rodríguez	Cobas	Id.	Id.	Id.	
294	Bartolomé Garriga Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
295	Cárlas Rodríguez Pérez	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
296	Manuel Rodríguez Sagrade	Id.	Id. y labradío	Id.	Id.	
297	José Fernández Fernández	Id.	Id.	Id.	Id.	
298	Teresa Fernández Bugueiro	Id.	Labradío	Navalleiros	Id.	
299	Bernardo Vázquez Jorge	Id.	Id.	Id.	Id.	
300	Bernardo Vázquez Fernández	Id.	Id.	Id.	Id.	
301	Benito Fernández Pérez	Id.	Id.	Id.	Id.	
302	Manuel Fernández Fernández	Id.	Id.	Id.	Id.	
303	Ramón Crespo García	Cobas	Id.	Id.	Id.	
304	Bernardo Vázquez Fernández	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
305	Ramón Crespo García	Cobas	Id.	Id.	Id.	
306	Claudio Rodríguez Vázquez	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
307	Josefa Fernández López	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
308	Ramón Gómez Pérez	Id.	Id.	Id.	Id.	
309	Angel Rodríguez Manso	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
310	Ramón Gómez Pérez	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
311	Manuel Rodríguez Sagrade	Id.	Id.	Id.	Id.	
312	José Fernández Rodríguez	Id.	Id.	Id.	Id.	
313	Carlos Rodríguez Pérez	Id.	Id.	Id.	Id.	
314	José Fernández Fernández	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
315	Teresa Fernández Bugueiro	Ardesende	Tojal y labradío	Id.	Id.	
316	Ramón Gómez Pérez	Id.	Tojal	Id.	Id.	
317	Carlos Rodríguez Pérez	Id.	Tojal y labradío	Id.	Id.	
318	Luis Vázquez Novoa	Id.	Id.	Id.	Id.	
319	Manuel Fernández Fernández	Id.	Labradío	Id.	Id.	
320	Vicente Fernández Pérez	Id.	Id.	Id.	Id.	
321	Manuel Fernández Fernández	Id.	Tojal y labradío	Id.	Id.	
322	Manuel Rodríguez Rodríguez	Bustelo	Tojal	Id.	Id.	
323	Benito Vázquez Rodríguez	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
324	Ramón Gómez Pérez	Id.	Id.	Id.	Id.	
325	Jacinto Rodríguez Sagrade	Bustelo	Id.	Id.	Id.	
326	Francisco Fernández González	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
327	Bernardo Vázquez Fernández	Id.	Prado y tojal	Id.	Id.	
328	Cesáreo Pérez	Cobas	Tojal	Id.	Id.	
329	Bernardo Vázquez Fernández	Ardesende	Labradío	Carballeirina	Id.	
330	Anselmo García Pérez	Ricobelo	Prado	Id.	Id.	
331	Bernardo Sanmamed Rodríguez	Bustelo	Id.	Id.	Id.	
332	Manuel Rodríguez Rodríguez	Cobas	Id.	Id.	Id.	
333	Manuel Rodríguez Rodríguez	Bustelo	Robleda	Id.	Id.	
334	Hers. de Benito Bernardez García	Id.	Id.	Id.	Id.	
335	Benito Rodríguez González	Id.	Id.	Id.	Id.	



Número de orden	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PROPIETARIOS	Vecindad de los propietarios	Clase de las fincas	Situación de las fincas	Nombre de los colonos ó arrendatarios	Vecindad de los colonos ó arrendatarios
336	Ramón Conde García	Bustelo	Tojal	Carballeiría	El mismo	
337	Domingo Fernández González	Cobas	Id.	Id.	Id.	
338	Jose Fernández Rodríguez	Ardesende	Id.	Apartado	Id.	
339	Luis Vázquez Novoa	Id.	Id.	Id.	Id.	
340	Ramón Pérez Adá	Id.	Id.	Id.	Id.	
341	Carlos Rodríguez Pérez	Id.	Id.	Id.	Id.	
342	Teresa Fernández Bugueiro	Id.	Id.	Id.	Id.	
343	Ramón Pérez Adá	Id.	Id.	Id.	Id.	
344	Teresa Fernández Bugueiro	Id.	Id.	Id.	Id.	
345	Manuel Rodríguez Sagrade	Id.	Labradío	Id.	Id.	
346	Teresa Fernández Bugueiro	Id.	Tojal	Id.	Id.	
347	Ignacio Gómez Sagrade	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
348	Antonio Rodríguez Hermida	Portamieira	Id.	Id.	Id.	
349	Francisco Fernández González	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
350	Anselmo García Pérez	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
351	Bernardo Vázquez Fernández	Ardesende	Id. y robleda	Id.	Id.	
352	Ramón Gómez Pérez	Id.	Tojal	Id.	Id.	
353	Antonio Rodríguez Hermida	Portamieira	Id.	Magro	Id.	
354	Luis Vázquez Novoa	Ardesende	Labradío	Id.	Id.	
355	Francisco Fernández González	Id.	Tojal	Id.	Id.	
356	Manuel Fernández Fernández	Id.	Id.	Id.	Id.	
357	Manuela Fernández Sánchez	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
358	Benito Vázquez Rodríguez	Ardesende	Labradío	Id.	Id.	
359	Ramón Pérez Adá	Id.	Id.	Id.	Id.	
360	Isabel Pérez Rodríguez	Cobas	Tojal	Id.	Id.	
361	Benito Fernández Pérez	Ardesende	Id.	Id.	Id.	
362	José Fernández Fernández	Id.	Id.	Id.	Id.	
363	Manuel Rodríguez Rodríguez	Bustelo	Id.	Id.	Id.	
364	Angel Rodríguez Manso	Ricobelo	Id.	Id.	Id.	
365	Jacinto Rodríguez Sagrade	Bustelo	Id.	Id.	Id.	
366	Monte comunal		Monte comunal		Id.	

Cea 14 de Diciembre de 1902.—El Alcalde, Leopoldo Rodríguez.—Hay un sello de la Alcaldía.

## JUZGADOS

Don Enrique Freire Marquina, Juez de instrucción de Puebla de Trives.

Por la presente requisitoria, cito y llamo al procesado Teodosio Pérez Fernández, de Sobrado, en este municipio, cuyas demás circunstancias se expresan á continuación y su actual paradero se desconoce, para que en el término de diez días contados desde la publicación de la presente en la «Gaceta de Madrid» y «Boletín oficial» de esta provincia, se constituya en prisión en el Establecimiento carcelario del partido y á disposición de este Juzgado y poderle recibir declaración indagatoria en sumario criminal que contra el mismo se le instruye por homicidio de Domingo García López, de Aceboso de la Encomienda, en este dicho municipio, bajo apercibimiento de que en otro caso será declarado rebelde y le parará el perjuicio que hubiere lugar con arreglo á la ley.

Al propio tiempo encargo á los individuos de la policía judicial, procedan á la busca y captura de dicho sujeto y su conducción á la cárcel pública de este partido.

Puebla de Trives dieciséis de Marzo de mil novecientos tres.—Enrique Freire Marquina.—Por mandado de su señoría, Manuel Casanova.

*Señas personales y de vestir de dicho procesado Teodosio Pérez*

Edad veintiún años, profesión labrador, hijo de Domingo y de María, estatura regular, pelo, cejas y ojos castaños, barba naciente, color bueno y mira bajo. Viste chaqueta y chaleco de paño negro, pantalón de pana blanca á cuadros, boina azul, botinas deástico de becerro negro con punteras, lleva una manta (tapabocas), por un lado tiene cuadros encarnados y por el otro blanca con cuadros color celeste.

## Agencias ejecutivas

### Primera zona de Carballino.—Ayuntamiento de Boborás

*Relación de los contribuyentes de este término municipal de domicilio desconocido para esta agencia ejecutiva, que comprende 1900, 1901 y 1902.*

Número del recibo talonario, nombres de los contribuyentes, importe del débito y recargos.

#### Trimestre vecinos

- 34 Andrés Rua Meolela, 18'80 y 2'73.  
856 José Rodríguez González, 13'72 y 2'06.  
874 José González Rodríguez por Losada, 92'32 y 13'84.  
1.314 Manuel Losada y hermanos, 58'13 y 8'71.  
1.322 Manuel Penela, 16'08 y 2'41.  
1.496 Manuel Alonso Casas, 1'72 y 0'25.  
1.771 Ramón García Sánchez, 149'37 y 22'45.

#### Semestrales vecinos

- 555 Francisco Otero, 1'38 y 0'20.  
1.213 Manuel Pérez Vila, 1'78 y 0'26.  
1.779 Lucía Rivas, 2'75 y 0'41.  
1.631 Rosa García Fernández, 0'80 y 0'10.  
666 Francisco López Ramos, 1'27 y 0'19.  
1.107 José Varela, 1'27 y 0'19.  
1.128 Juan López Iglesias, 1'15 y 0'13.  
1.891 Vicente Prieto Varela, 1'04 y 0'16.

#### Anuales vecinos

- 1.805 Santiago Pena Otero, 4'12 y 0'62.  
104 Antonio Riande López, 2'28 y 0'34.  
1.184 José Gernández Torres, 4'58 y 0'69.  
1.842 Tomás Nogueira Domínguez, 1'38 y 0'20.

- 701 Ignacio Doporto, 0'57 y 0'08.  
1.161 Luis González por Ramón López, 2'29 y 0'34.  
1.236 Manuel López Domínguez, 0'57 y 0'08.  
749 José González Salón, 0'45 y 0'07.

#### Forasteros por trimestre

- 6 Antonio Martínez, 5'85 y 0'88.  
46 Benito Fernández Fernández, 113'66 y 17'04.  
113 Joaquín Caballero, 55'35 y 8'30.  
136 Joaquín Crespo, 30'37 y 4'55.  
143 Juan Savedra, 150'27 y 22'54.  
145 José Pardo herederos, 257'57 y 38'63.  
158 José Gallego, 5'19 y 0'78.  
180 Manuel Fraiz, 20'55 y 3'08.  
182 Manuel Varela, 22'18 y 3'23.  
189 Mauro Moure, 8'10 y 1'22.  
198 Manuel Portela, 6'77 y 1'02.  
238 Ramón Millara, 36'44 y 5'46.  
161 Juana García, 2'58 y 0'38.  
224 Prudencio Mosquera, 2'97 y 0'44.

- 185 Manuel Otero Gil, 9'77 y 1'47.  
220 María Fernández herederos, 3'12 y 0'46.  
45 Baltasar Carballeda, 2'84 y 0'42.

#### Semestrales forasteros

- 3 Angel Camiña, 3'58 y 0'54.  
42 Baltasar Alemparte, 11'56 y 1'73.  
52 Camilo Taboada, 8'95 y 1'35.  
67 Domingo Antonio Caiña, 11'20 y 1'68.  
87 Froilán Prieto, 1'13 y 0'19.  
108 Inés González Pérez, 1'79 y 0'25.  
140 José González, 1'34 y 0'20.  
216 Tomás Alemparte, 8'96 y 1'35.  
17 Alejandro Monote, 7'16 y 1'08.  
130 José Barrosa Ameijeiras, 5'10 y 0'77.  
82 Francisco Otero, 2'22 y 0'33.  
107 Ignacio Bugallo, 1'78 y 0'26.

#### Anuales forasteros

- 14 Angel Fernández, 6'72 y 1'01.

- 65 Clemente Díaz por su mujer, 2'68 y 0'40.

- 165 Joaquín García, 4'45 y 0'67.  
172 Leopoldo Cerdeiro, 0'73 y 0'09.  
175 Manuel Valiñas, 5'58 y 0'84.  
201 Manuel Ramos López, 3'36 y 0'50.

- 47 Bartolomé Arnelas, 1'78 y 0'26.  
95 Fernanco Ameijeiras, 1'37 y 0'20.

- 139 Juan Cadete, 0'46 y 0'06.  
171 José González por Ramón López, 3'14 y 0'47.  
202 Modesto Lois Taboada, 1'34 y 0'20.

Total rústica 1.208'08 pesetas de débito y 181'84 de recargos.

247. El vecino Ramón García Sánchez, por urbana 5'50 de débito y 0'82 de recargo.

9. El forastero Conde de Troncoso, por idem 2'15 de débito y 0'32 de recargo.

Total urbana 7'65 pesetas de débito y 1'14 de recargos.

Y á los efectos de notificación se inserta la precedente relación en este periódico oficial de conformidad á lo dispuesto en el último párrafo del art. 142 de la Instrucción de recaudación con objeto de proseguir el procedimiento de apremio contra los bienes de los deudores.

Boborás 12 de Marzo de 1903.—El Agente, Joaquín G. Neira.

## IMPRENTA DE A. OTERO

En este antiguo y acreditado establecimiento, que cuenta con un moderno y completo surtido en máquinas, tipos y orlas, se perfecciona toda clase de trabajos, con perfección y economía.

IMPRENTA DE A. OTERO  
San Miguel, núm. 15